

INTRODUCCIÓN

El Estado constituido tras la victoria del ejército franquista en la Guerra Civil tenía, no podía ser de otra manera, unos fundamentos ideológicos y sociales radicalmente distintos de los que inspiraban el pensamiento republicano e, incluso, de los gobiernos de la Restauración. Una primera consecuencia del triunfo franquista fue la intensa campaña de depuración, que también afectó al profesorado universitario y aquellos otros profesionales que desarrollaban tareas investigadoras o técnicas en otros ámbitos de la Administración. Este ‘atroz desmoche’ dinamitó el sistema científico y tecnológico español en 1939; sobre sus cenizas se levantó una nueva estructura, pálido remedo de la existente en los años previos a la contienda.

La superestructura científica diseñada por el franquismo fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pergeñado como órgano asesor del Estado para la organización y ejecución de los planes científicos de las nuevas autoridades. El Consejo se construyó sobre la ruinas del edificio científico de la Junta de Ampliación de Estudios (ruinas generadas por los mismos que erigieron la nueva estructura científica). Sobre él pesaron, por un lado, las filiações de los distintos grupos que tras la Guerra Civil adquirieron peso en la política estatal y, por otro, la visión claramente utilitaria de la investigación —de la que había carecido la Junta— omnipresente en los primeros años del Consejo.

La estructura del Consejo, como la de buena parte de los órganos de la España del primer franquismo, adoleció de un excesivo sentido jerárquico: los laboratorios se agrupaban en institutos, a su vez encuadrados en patronatos, sujetos a la tutela de la presidencia del organismo. La jerarquización administrativa no conllevó una definición precisa de los programas de investigación; si hubiera que buscar una directriz en lo que a la investigación patrocinada por el Consejo representa, esta podría ser la necesidad de publicar hasta la más nimia aportación que surgiera de los laboratorios. Nacen así un alto número de revistas científicas, prácticamente concebidas como órgano de expresión de la actividad de cada centro o laboratorio. Esta fecundidad editorial transmite la impresión de ser un mero soporte testimonial de las memorias de la institución y evidencian la inflación de información que estas presentan.

El contrapunto a esta vorágine de letra impresa es *Arbor*, la revista de mayor proyección para entender el sustrato ideológico e intelectual del Consejo. Una revista impregnada de simbolismo, al igual que la institución que la edita; el árbol luliano, icono del Consejo, inspira el nombre de la publicación; su subtítulo a partir de 1947 —*Revista general de la investigación y la cultura*— incorpora el carácter de compendio de disciplinas que se le quiso dar. Su contenido reflejó fielmente la línea de pensamiento de la institución, coherente con los principios del nuevo régimen.

La ciencia, aun cuando a veces se presente sin condicionantes ideológicos, no carece de ellos. Quienes hacen ciencia tienen un inherente compromiso intelectual (explícito o no) que subyace en su propia obra científica. Si hay un caso paradigmático que evidencia esta influencia sociopolítica sobre la actividad científica es, sin duda, el modo de afrontar la interpretación de las teorías paleoantropológicas en la sociedad de posguerra. A pesar de que la elite científica tuviera acceso a las teorías científicas más actuales, sobre su interpretación existió un tamiz ideológico, de cariz católico, que condicionó la difusión de las nuevas teorías sobre el origen del hombre.

Estos temas, sensibles por las derivadas morales e ideológicas que tenían —ya que el dogma católico podía entrar en conflicto con las modernas interpretaciones—, fueron tratados en buena medida por colectivos religiosos, perfectamente formados en la materia, que supieron compatibilizar las nuevas concepciones científicas con el discurso ortodoxo en términos católicos. De esta forma, las explicaciones estrictamente teóricas se incorporaron a nuestro medio social de una forma no ofensiva o problemática para el nuevo régimen —que contaba con el apoyo incondicional de la jerarquía católica—; los medios en que algunas de las aportaciones de estos autores se presentan dan testimonio de la perfecta integración del discurso científico en el teológico: revistas como *Razón y Fe* o *Religión y Cultura*, que fundadas con anterioridad a la Guerra Civil se mantendrán pujantes durante toda la dictadura, eran instrumento habitual para la difusión de esta simbiosis biológico-teológica.

El Consejo amparó el trabajo científico en la primera década del régimen con unas premisas claras: la coherencia con los postulados del nacionalcatholicismo —ya reseñada— y el énfasis en la investigación aplicada. Desde el gobierno franquista se había promovido la constitución de otros órganos administrativos de carácter científico-técnico, estrechamente vinculados al sector industrial, con los que desarrollar su programa autárquico. Sin duda el Instituto Nacional de Industria (1941) es el exponente más claro de esta política; la creación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (1942) y, más tarde, de la Junta de Energía Nuclear (1951) son otros hitos en la misma línea, estos más mediatizados aún por la estrategia militar. Otros organismos públicos de investigación, como el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas o el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, vigentes o creados durante la dictadura primorriverista, se reorganizaron en 1940, adaptando sus reglamentos a la nueva situación política. Se esquematizan así los principales agentes en el desarrollo de la política científica e industrial del primer franquismo. Diseño no exento de carencias y solapamiento de competencias; imperfecciones, en

definitiva, surgidas de una estructura generada con urgencias y carente de una política uniforme, a pesar de la aparente unidad del régimen. Las diversas familias políticas, los intereses corporativos y las incertidumbres sociales y económicas desdibujaron una política concordante y coherente.

En este marco, regido por una ‘tutela imperfecta’, el colectivo farmacéutico adquiere un especial protagonismo y lo hace desde distintos frentes: desde su actividad académica, tanto en las universidades como en el CSIC; desde la cómoda situación profesional que su diligente participación en la contienda y en el diseño del nuevo Estado deparaba a quienes se vincularon al bando franquista; y desde la industria privada, motor de la renovación terapéutica y, en algún caso, refugio de los que optaron por el exilio interior.

Ante la no inclusión de la investigación y desarrollo farmacéutico entre las líneas prioritarias del INI y el escaso realce que esta línea de trabajo tuvo para los gestores del Consejo, la industria farmacéutica de capital privado se erige en el tejido científico-tecnológico de esta área productiva. Lo hace afrontando infinidad de carencias: maquinaria, materia prima y especialistas en desarrollo industrial; pero también con algunas prerrogativas: el aval de ‘carácter nacional’ de estas empresas en una economía autárquica, un permisivo sistema de patentes y el beneficio económico directo que supuso la implantación del seguro obligatorio de enfermedad.

Como en otros sistemas de carácter fascista, la mujer quedaba relegada al rol de madre y esposa; solo en contadas ocasiones se permitía su entrada en el mundo laboral y el trabajo asignado en estos casos era un ‘trabajo delicado’, un ‘trabajo de cuello blanco’. La industria farmacéutica o la investigación desarrollada en el Consejo son casos paradigmáticos de la creciente presencia de la mujer en el mundo laboral, pero limitada a un estatus subordinado al varón y con un evidente ‘techo de cristal’ que dificultaba su promoción a puestos de responsabilidad. No obstante, algunos colectivos, y el de las matronas es el más señero, intentan afianzar el protagonismo femenino en la vida pública. Estos esfuerzos fueron

sistemáticamente eclipsados por otros colectivos profesionales que gozaban de un mejor acomodo en la ideología política franquista.

Este volumen recoge las aportaciones de un grupo de investigadores que, durante los últimos años, se han ocupado de estudiar las relaciones entre ciencia, farmacia y sociedad durante los ‘años grises’ del primer franquismo.

Francisco Pelayo analiza la pervivencia desigual del darwinismo en España, frente a su desarrollo en el resto del mundo científico; mientras la teoría sintética de la evolución en Europa y Norteamérica se afianzaba sobre los pilares de la genética, sistemática y paleontología; el debate español se centró en los aspectos paleoantropológicos y la subordinación del evolucionismo al dogma católico.

La investigación farmacognóstica desarrollada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es valorada por Alfredo Baratas, quien hace evidente la anemia de resultados y la dispersión temática del trabajo realizado en el Instituto José Cestino Mutis del CSIC.

El rol atribuido a la mujer por la ideología predominante y su incidencia en el desarrollo de las profesiones sanitarias es examinado por Dolores Ruiz-Berdún. La Sección Femenina, con Pilar Primo de Rivera al frente, se ocupó de la promoción de la mujer, pero bajo unos parámetros que primaban la responsabilidad doméstica y el apoyo a la familia frente a la inserción en el mundo laboral; el colectivo de matronas y enfermeras, en el esquema franquista, quedaba bajo la supervisión del médico, ‘varón y superior jerárquico’; esta situación de subordinación social y profesional se entremezcló con problemas de identidad y reconocimiento corporativo.

Los farmacéuticos militares vieron ‘recompensada’ su colaboración con el ejército vencedor a través del establecimiento de un Cuerpo de Farmacia Militar. María Luisa de Andrés Turrión analiza el proceso de fundación de esta estructura sanitaria dentro del organigrama militar y estudia las diversas actividades que le fueron encomendadas: desde la fabricación, distribución y dispensación de medicamentos, hasta la realización de análisis químicos y toxicológicos.

Raúl Rodríguez Nozal ofrece una visión global de la industria farmacéutica durante el franquismo, utilizando como elemento de análisis la documentación generada por el Sindicato Vertical de Industrias Químicas, en la que aquella quedó englobada por la reglamentación laboral del Régimen.

Un importante sector económico de la industria farmacéutica, el medicamento veterinario, es estudiado por Alberto Gomis. Su aportación detalla la particular naturaleza de este tipo de productos de uso agropecuario, directamente relacionados con el mundo rural de la España autárquica. Este trabajo se vertebra sobre los fondos patrimoniales que forman parte de la colección de medicamentos de fabricación industrial del Seminario de Historia de la Farmacia de la Universidad de Alcalá.

En una España aislada, la disponibilidad de patentes propias para la fabricación de nuevos productos de interés terapéutico era esencial. Antonio González Bueno, Carlos Pérez Teijón y Raúl Rodríguez Nozal analizan el caso particular de las patentes de sulfamidas presentadas ante la Administración española entre 1938 y 1963, evidenciando el proceso de ‘hispanización’ de las patentes internacionales, adaptadas para el uso de materia prima de origen nacional.

La penicilina fue, sin lugar a dudas, el elemento que marcó la revolución terapéutica de las décadas centrales del siglo xx. Los procesos que fomentaron la traslación de este fármaco a la realidad española y el entramado de intereses comerciales y administrativos que hubo de afrontar son estudiados por Gloria Redondo y Antonio González Bueno. Uno de los protagonistas de la recepción de la penicilina en España fue Florencio Bustinza (1902-1982), catedrático de Fisiología Vegetal en la Universidad de Madrid y amigo personal de *sir* Alexander Fleming, que realizó investigaciones en torno a nuevos antibióticos, una intensa labor divulgativa sobre el descubrimiento y uso de la penicilina. De estas actividades, no exentas de intereses personales en la industria farmacéutica de su época, se ocupan José Fonfría y Pilar Calvo de Pablo.

Dos últimos artículos abordan sendos casos de laboratorios farmacéuticos activos durante el periodo objeto de estudio. Javier Puerto relata la historia de IBYS, un laboratorio formado previamente a la Guerra Civil, con una actuación destacada durante los años de la dictadura, que se convirtió en uno de los ‘centros de gravedad’ del exilio interior farmacéutico. Carlos del Castillo y Rosa Basante estudian el laboratorio Profansa (Productos Farmacéuticos Nacionales, Sociedad Anónima), gestado en pleno franquismo, que gozó de una vida comercial intensa, pero efímera, y que, de alguna forma, ejemplifica el oportunismo económico que, para algunos empresarios, supuso el mundo del medicamento.

En nuestros días, la sociedad española ha vivido una aproximación histórica, analítica y desapasionada, a la dictadura franquista. En esta línea de trabajo, alejada de la exaltación y del vituperio, es hacia la que los autores orientan su investigación. Son conscientes de que la ciencia, tanto pura como aplicada, es una más de las facetas de la actividad social; y que, como toda la sociedad española, estuvo fuertemente condicionada por la tutela que sobre ella ejerció la ideología predominante. No obstante, esta ‘tutela’, autoritaria y dotada de un fuerte aparato de presión sobre la población, distó mucho de ser ‘perfecta’.

Los autores de este volumen son deudores de dos proyectos de investigación HAR2009-09564 y HAR2010-21333-C03-01 del antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación.

ANTONIO GONZÁLEZ BUENO
ALFREDO BARATAS DÍAZ